El sector primario y la industria de alimentación

Resumen ejecutivo

Madrid, marzo 2024

CCOO de Industria
C/ Albasanz, 3, 4ª, 28037 Madrid
mblanco@industria.ccoo.es

Fundación 1º de Mayo
C/ Longares, 6, 28022 Madrid
jbabiano@1mayo.ccoo.es

I N D I C E

La alimentación en el mundo..... 3

El sector agropecuario en la UE..... 3

El sector agropecuario en España..... 5

La aprobación de la PAC 7

La industria de la alimentación y bebidas en España 8

PERTE para la Industria Agroalimentaria..... 10

Propuestas de actuación sindical..... 11

La alimentación en el mundo

El comercio alimentario es muy intenso: *México surte a EEUU, China al Sudeste Asiático, Marruecos y España a Europa, Rusia nutre de cereales a Turquía y países africanos, etc*. Ucrania surte aceite de girasol y trigo, maíz y cebada son los productos más importados al resto del mundo por Ucrania y Rusia.

La agricultura ha experimentado un proceso de profunda transformación en las últimas décadas. Empezó a fraguarse con la mecanización de las labores agrícolas y la introducción de fertilizantes y de productos de sanidad vegetal, y se aceleró en el futuro gracias a la introducción de nuevas tecnologías e innovaciones como los robots, los sensores o las nuevas técnicas de edición genética (inteligencia artificial).

Los empleos en la agricultura en todo el mundo, incluidas la silvicultura y la pesca, disminuyó 17% en el período 2000-2020, alcanzando 874 millones en 2020, 173 millones menos que en 2000, de acuerdo con un informe de la FAO: *el 67% trabaja en Asia, el 26% en África, el 5% en Europa y el 2% en Oceanía*.

Un reciente estudio de la ETC Group[1] refleja que solo dos empresas controlan el 40% del mercado mundial de semillas comerciales, en comparación con las diez compañías que controlaban esta misma proporción del mercado hace 25. Y en su informe, Food Barons 2022 (Barones de la Alimentación años, refleja que les permite ejercer una enorme influencia sobre los mercados, la investigación agrícola y el desarrollo de políticas, lo cual socava la soberanía alimentaria.

Los sistemas alimentarios y la agricultura deben abordar tanto las emisiones globales como proteger las vidas y los medios de subsistencia de los agricultores que viven en la primera línea del cambio climático. Un total de 134 países, que representan el 70% de los alimentos, a casi 500 millones de agricultores y el 76% de las emisiones totales del sistema alimentario mundial -entre ellos España-; firmaron en diciembre de 2023 en Dubái la *Declaración sobre agricultura sostenible, sistemas alimentarios resilientes y acción climática*.

Un suelo sano es la base para producir alimentos de la máxima calidad y la agricultura regenerativa es un sistema de producción que contempla el restablecimiento de los suelos para mantener e incrementar su fertilidad. En realidad, es un modelo que va más allá de la agricultura ecológica, ya que además busca la recuperación del suelo.

El sector agropecuario en la UE

Los objetivos previstos en el acta para la constitución de la UE, en Roma en 1957, contemplaban para el sector agropecuario: *el incremento de la productividad, asegurar el nivel de vida de los agricultores, luchar contra los retos*

[1] Organización No Gubernamental (ONG) que se dedica a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos. Trabaja junto con organizaciones de la sociedad civil por la independencia y desarrollo sustentable.

de la estabilidad de los mercados y garantizar una seguridad en los abastecimientos a precios razonables.

El sector agropecuario europeo supone el 0,5% del PIB de la UE y por cada euro gastado el sector agrícola crea 0,76 euros adicionales para la economía de la europea. La industria y los servicios relacionados con la agricultura representaron 9,5 millones de puestos de trabajos en 2019 en la UE.

Respecto a la industria alimentaria europea es la principal actividad de la industria manufacturera en la UE, con un valor superior a los 1.093.000 millones de euros de cifra de negocios, representando el 14,2% de esta industria. Cuenta con 289.000 empresas que dan empleo a 4,52 millones de personas.

Los compromisos de la legislatura de la Unión pasaban por las exigencias de la *Política Verde*, buenas prácticas medioambientales y la *Estrategia De la Granja a la Mesa*. El *reglamento para el uso sostenible de fertilizantes,* el *reglamento de Restauración de la Naturaleza*, las nuevas exigencias en materia de bienestar animal son aspectos que se vieron en el segundo semestre de 2023. El acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la *Ley de Restauración de la Naturaleza* se produjo en noviembre de ese año.

La Comisión Europea inicio en enero de 2024 el denominado *Diálogo estratégico sobre el futuro de la Agricultura de la UE*, ya anunciado por la Comisión en septiembre de 2023. Y fue coincidiendo en el tiempo con las numerosas protestas de agricultores en el continente, constituyendo una respuesta de la Comisión al descontento de los agricultores por la multiplicación de las normativas medioambientales de la PAC y de las Estrategias *De la granja a la mesa* y *Biodiversidad 2030* del *Pacto Verde Europeo*.

En cuanto a la Política Agrícola Común, reflejada en la nueva PAC para el periodo 2023-2027, llega con retraso y con modificaciones sustanciales, entrando en vigor en 2023 con la introducción de mayores requisitos ambientales. En la misma, se incorpora la prohibición de los acuerdos entre empresas que restringen la competencia.

La *adopción de la condicionalidad social* fue un gran logro para los y las trabajadoras del sector agrario. Se trata de endurecer las sanciones para quienes no cumplan con la aplicación de la condicionalidad social de la PAC para que las personas trabajadoras del campo mejoren sus condiciones laborales.

Los compromisos de la actual legislatura de la Unión pasan por las exigencias de la *Política Verde*, buenas prácticas medioambientales y la *Estrategia De la Granja a la Mesa*. Además, se pretende el impulso y la defensa de políticas que aboguen por una seguridad alimentaria, que la población pueda adquirir los bienes alimentarios a precios accesibles, pero, sobre todo, a que ello se logre fundamentalmente con una soberanía alimentaria.

El Parlamento Europeo anunció a finales de 2023 que el declive demográfico es más pronunciado en las poblaciones rurales y en los agricultores que de media en la UE tienen 65 años o más.

El sector agropecuario en España

La base del sector la constituyen, en el último censo conocido de 2020, con 914.871 explotaciones agrarias repartidas por el territorio español, ocupando una superficie agraria utilizada de 23,9 millones de hectáreas. Un 7,6% menos que en el censo de 2009. Se trata de un sector muy fragmentado, con más de la mitad de la superficie muy pequeña, de menos de 5 hectáreas.

En el mismo periodo analizado por el censo, la renta agraria en moneda corriente pasó de 21.000 euros a 28.400 euros y de 22.800 a 36.000 por unidades de trabajo año (UTA). En este mismo concepto, la renta, descontada la inflación, pasó de 11.300 euros a 16.800 euros. Y los costes de producción pasaron de suponer el 40% a superar el 50% del valor de la producción final agraria, una deriva que empeorará por el fuerte incremento de las materias primas registrado.

A cierre de 2023, respecto de 2019, el sector primario agregado (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) ha sido el único que ha incrementado su PIB sectorial. La agricultura representa el 2,3% del PIB de España, por debajo de la construcción (6%) y muy lejos de la industria (16%) o los servicios (75%).

España es el octavo país del mundo y el cuarto de la UE por valor de la balanza comercial agroalimentaria. España ocupaba en 2022 el tercer puesto dentro de la UE, por detrás de Francia e Italia, y por delante de Alemania.

La productividad del campo español es baja. El valor que se consigue sacar del trabajo del campo cada año fue de 1.183 euros por hectárea en 2022 (de media), más de 400 euros por debajo de lo que alcanza en Francia o Alemania y menos de la mitad que en Italia (la media UE es de 1.433 euros por hectárea).

El valor generado por la producción agraria en España rondó en 2023 los 32.000 millones de euros. A pesar de que fue una mala campaña, se trata de una cifra récord para el campo español y se debe en gran medida a que los precios aumentaron considerablemente mientras los costes intermedios descendieron. La producción de la rama agraria -producción vegetal y animal- registra un valor récord, con el 3,3% más que en 2022, según el Ministerio de Agricultura.

El comercio exterior del agro ascendió a 22.442 millones de euros en el primer semestre de 2023, lo que supuso un 6,2% más que en 2022, repartiéndose en 12.210 millones en exportaciones y 10.231 millones en importaciones. Las importaciones desde terceros países se dispararon en los últimos años, según los datos del Ministerio de Agricultura, y han ido ganando peso sobre los socios de la UE.

De las más de 900.000 explotaciones agrarias existentes, unos 660.000 titulares son perceptores de las ayudas europeas que recibirán 47.724 millones de euros hasta 2027, contando con la prórroga de la anterior regulación en este 2021 y 2022. Es una cantidad similar a la de la PAC actual. El grueso será, como siempre, las ayudas directas.

Por CCAA destaca el elevado peso que tiene el sector en Castilla-La Mancha y Extremadura, así como en Andalucía. Murcia es la comunidad que registra un mayor peso del sector agrario sobre el empleo regional, seguida de Extremadura. Andalucía es la que concentra un mayor número de ocupados. Andalucía fue la comunidad con más renta agraria, seguida de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La producción agraria ha tenido un efecto positivo en la renta agraria, sin embargo, los gastos soportados por los agricultores y ganaderos son los que han lastrado la renta en 2022, con un incremento en valor del 55,3%. La renta agraria cae en 2022 un 5,5% en euros corrientes hasta los 27.861 millones. La cifra se sitúa un 1,1% por encima de su valor en 2020. La fuerte subida de la inflación en 2022, y principios de 2023, repercutieron en incrementos de los costes de producción en el sector agrícola y ganadera.

Hace una década, los costes de producción suponían entre un 40% y un 45% del valor de la producción final agraria. Ahora se acercan al 60%, lo que afecta la viabilidad de las explotaciones y que agricultores y ganaderos se planteen y lleven a cabo ajustes en su actividad para reducir gastos y pérdidas.

Según la EPA de 2023, el sector agrario reúne a 770.700 ocupados, un 3,6% del total. Es una proporción en mínimos históricos, casi un punto por debajo del 4,5% que suponía en 2013. Con todo, la ocupación avanzó en 2023 un 2,3%, con una ganancia anual de 17.300 trabajadores. Es un ritmo de incremento menor que el global del mercado laboral (3,8%). La Encuesta de Población Activa (EPA) también verifica esa ralentización en la variación del empleo agrario en el segundo semestre del año, hasta el extremo de que arroja una reducción del promedio semestral en un 9,6%, al disminuir en 50.000 personas.

La reducción del empleo se nutre de la disminución del número de personas con contrato temporal, puesto que la población con contrato indefinido ha crecido, lo que se tradujo en una reducción de la tasa de temporalidad de 8,5 puntos, pasando del 48,2% al 39,7% según el promedio semestral calculable a partir de la EPA. La reforma laboral también ha tenido un efecto positivo en el sector, puesto que la tasa de temporalidad ha bajado a la vez que aumenta el número de personas que están vinculadas a la ocupación mediante contrato indefinido.

El paro en la agricultura se situó en 97.825 personas a cierre de 2023, lo que supuso el 13,6% menos que en 2022, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Entre los extranjeros, el paro en la agricultura sumó 21.281 personas, lo que supuso una contracción del 17,33% respecto a diciembre de 2022 (con 4.461 personas menos). De ellos, 12.953 extranjeros procedían de países de fuera de la UE y los 8.328 restantes eran de países comunitarios.

Otra seña de identidad del sector agrario es la desigualdad de género, pues entre las mujeres la temporalidad sigue siendo más alta que entre los hombres. Esta circunstancia vuelve a significar que los empresarios del sector aplican una flexibilidad externa de la mano de obra utilizando, sobre todo, a la población femenina. Es una de las actividades en las que las empresas más recurren a las ETT.

La aprobación de la PAC

Para España sólo la PAC supone unos 6.800 millones de euros al año, que llegan de forma directa a más de 680.000 beneficiarios en agricultura y ganadería, según el INE. Los fondos de desarrollo rural alcanzan unos 1.100 millones de euros al año y se complementan con la financiación del Estado y las CCAA, con otros 550 millones de euros. Para la nueva PAC España, mantiene el presupuesto, con 47.724 millones de euros para el período 2021-2027.

El Ministerio de Agricultura plantó en noviembre de 2021 su propuesta de aplicación obligatoria de la *condicionalidad social a partir* del 2024, aprobada con la nueva PAC, un año antes del límite establecido por Bruselas, mientras que los sindicatos defendieron su implementación a partir del año 2023, año de entrada en de la misma.

El apoyo a la renta para todas las explotaciones, el mecanismo principal de distribución de las subvenciones de la PAC se quedará desde ahora con el 60% de las ayudas directas. La idea es que las subvenciones se simplifiquen y tiendan a igualarse. El Ministerio quiere que en 2027 todos los productores dentro de la misma región perciban lo mismo. Hasta entonces, los pagos a quienes y más y menos perciben se irán acortando año a año.

Los pagos para el desarrollo o inversiones de las empresas agroalimentarias se elevan a unos 7.400 millones de euros que se reparten entre unos 822.000 solicitantes. Uno de los objetivos de la Administración de cara a la próxima reforma es lograr una progresiva redistribución de los mismos para hacer una PAC más social, más ligada a la explotación familiar y a los profesionales y más equitativa.

En la distribución de todos esos fondos procedentes de la PAC en el último ejercicio (2021) se visualizan ciertos desajustes. Del total, 310.000 cobran menos de 2.000 euros (un 47%), que se llevan poco más del 5,5% de los fondos percibidos (unos 280 millones). Unos 820 beneficiarios, el 0,12%, cobran 280 millones, otro 5,5% de los recursos. Y solamente el 0,01%, 86 beneficiarios perciben el 1,45% de los fondos, con 74 millones.

Al margen de unas obligaciones mínimas, la PAC establece nuevos requisitos medioambientales y también sociales, ya que persigue mejorar la calidad del empleo en el sector. Son los ecorregímenes se concretan en una serie de prácticas a las que los productores pueden adherirse voluntariamente.

Junto a los datos sobre la distribución de los pagos directos, la Administración ha hecho público el reparto pormenorizado del dinero procedente del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que suman un importe conjunto de 7.368 millones. En estos dos apartados se suman a los pagos directos los correspondientes a otros conceptos como: *medio ambiente, política forestal, incendios, primera instalación de agricultores, servicios en el medio rural o inversiones de empresas*.

La Comisión Europea autorizó, a petición de España y otros Estados miembros, incrementar del 50% al 70% el anticipo de las ayudas directas de la PAC. Constituyen alrededor del 90 % de los pagos totales anuales del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y suponen una garantía de renta para los agricultores que presentaron su solicitud de ayuda en 2022.

Un total de 622.404 de agricultores y ganaderos presentaron la solicitud única de las ayudas de la PAC para 2023, primera campaña en la que se aplica el Plan Estratégico Nacional de 2023-2027.

La industria de la alimentación y bebidas en España

La industria agroalimentaria constituye el mayor subsector industrial del país, aporta el 10% al PIB nacional, generando más de 2,8 millones de empleos, directos e indirectos y sobre la que se sustentan 30.260 industrias agroalimentarias, según los últimos datos del DICE del INE, que aportan una cuarta parte de la facturación de toda la industria manufacturera y una quinta parte del empleo. La industria alimentaria española ocupa el cuarto puesto en valor de cifra de negocios, por detrás de Francia, Alemania e Italia.

La industria alimentaria está formada por 30.000 empresas, el 96% PYME, con una producción superior a 145.000 millones de euros en 2023. Es la primera rama manufacturera del sector industrial, según los últimos datos del INE, representa el 24,2% del sector manufacturero, el 22,6% de las personas ocupadas y el 20,4% del valor añadido. Participa en el 2,4% del PIB de España (en VAB)[2] y mejoran las cifras de empleo con un 0,6% más de afiliados en 2023.

El número de empresas de la industria de alimentación y bebidas asciende a 28.335, el 96% PYME, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, lo que representa el 17,9% de la industria manufacturera y el 15,9% de total industria. La producción del sector en 2022 se elevó a 144.955 millones de euros, según datos de la patronal del sector (FIAB), con un VAB cifrado en 29.786 millones de euros en ese año. Este dato queda reflejado en el peso que representa dentro de la economía española.

La cárnica es la cuarta mayor industria del país (por detrás de la industria automovilística, la industria del petróleo y combustibles o el suministro de energía, y junto a sectores como las industrias química o metalúrgica), según ANICE. En total el sector está conformado por 3.000 empresas presentes sobre todo en zonas rurales.

Por comunidades, un 18,5% de las empresas se localizan en Andalucía. A continuación, se sitúan Cataluña y Castilla y León (12,8% y 10,1%, respectivamente), en tanto que Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha representan entre el 7,5% y el 8,5%.

[2] Contabilidad Anual Nacional de España 2020 (INE)// MAPA-Subsecretaría (2023.09.V1).

Las exportaciones crecieron el 12,8%en 2022, en comparación con 2021. En 2000, España importaba más productos agrícolas y pesqueros de los que exportaba Ahora, el saldo comercial neto es favorable. Las exportaciones alimentarias en 2022 crecieron en valor hasta un 9,0%, aunque en volumen el comportamiento fue inverso, retrocediendo un 7,2%, lo cual evidencia el fuerte impacto al que la inflación está sometiendo a la industria.

El sector ha visto retroceder el número de empresas en un 0,3% y las estructuras empresariales más pequeñas han sido las más afectadas. Por contra, mejora ligeramente el número de grandes empresas (11,4%), lo que confirma el proceso de concentración que el sector venía reflejando en ejercicios anteriores. La PYME es la principal estructura del sector, representando con un peso del 96% del tejido empresarial.

Según los datos aportados por el MAPA, el número de activos en el cuarto trimestre de 2022 era de 605.400 personas. Según datos de FIAB, la afiliación a la SS fue de 454.800 personas, con un crecimiento del 3,2%, superando los registros de la industria manufacturera, y con un 39,1% de empleo femenino. Los datos de FIAB en el primer semestre de 2023 reflejan crecimientos del 4,3%.

El segmento de las bebidas eleva su contribución al conjunto de la industria de alimentación y bebidas con un crecimiento del 18,2%. El segmento de alimentación suma una variación positiva del 2,7%, continuando como el principal protagonista de estos positivos resultados.

Aunque las cifras de empleo masculino siguen superando los niveles alcanzados por el colectivo de mujeres, en la primera mitad de 2023 el peso relativo del empleo femenino ha permanecido prácticamente estable, cifrándose en un 38,4%, frente al 38,5% con el que se cerró el primer semestre del ejercicio anterior.

En materia de igualdad de género dista de alcanzar los referentes globales de la economía, en el que la intervención del empleo femenino en servicios marca de manera fundamental las diferencias observadas y establecidas en 5,9 y 17,1 puntos porcentuales con relación a la industria de los alimentos y bebidas respectivamente.

El número de ocupados en 2023 ascendía a 549.300 personas (disminución de un 4,4% respecto al trimestre anterior), equivalente al 21,5% de la industria manufacturera y al 2,6% del total de la economía[3].

La importante irrupción de nuevas tecnologías que se prevén en los próximos años en campos como la inteligencia artificial, la biotecnología industrial, la robótica y el Big Data, tendrán una incidencia determinante en el sector. Por lo que se vive un momento crucial donde las empresas alimentarias tienen el reto de seguir siendo competitivas, generando propuestas de valor al mercado, pero también tienen que estar atentas para anticipar cambios disruptivos que pueden cambiar sus actuales modelos de negocio.

[3] EPA 4º trimestre 2023.INE (26 enero 2024).

PERTE para la Industria Agroalimentaria

Aprobado en febrero de 2022, destinará 1.000 millones de euros para la transformación del sector agrario y la expectativa de "*apalancar*" otros 2.000 millones de inversión privada. Pretende promover el desarrollo integrado de toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización de los procesos y de la incorporación de conocimiento e innovación (IA, ahorro energético, trazabilidad y seguridad alimentaria).

El instrumento Next Generation EU es una herramienta adicional al resto de fondos europeos (FEDER, FEAGA, FEADER, FSE, FTJ…) que viene recibiendo ese sector de la UE. Es decir, que es complementario al acceso a otros fondos y las entidades del sector agroalimentario, entendiendo como sector toda la cadena de valor (desde la producción primaria, pasando por la transformación a la logística), podrán acceder a unos u otros en función de los programas de ayudas.

Además, se realizó en mayo de 2022 una inversión adicional de 800 millones de euros para el sector para afrontar el incremento desorbitado de los precios de los combustibles y de las materias primas. Esta cantidad, que se destina a mejorar el sistema de gestión del agua y a la modernización de los regadíos, se añade a los 1.000 millones de euros incluidos en el proyecto estratégico.

Hay otras líneas fuera del PERTE Agroalimentario que pueden ser de interés para el sector, como las que incluye el PERTE de Digitalización del agua y la convocatoria de proyectos singulares para comunidades de regantes, o las de la hoja de ruta del biogás en el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA), para gestión de residuos agroganaderos. Es importante tener en cuenta que las inversiones puramente agroganaderas seguirán estando financiadas con ayudas procedentes de FEADER o FEAGA.

La convocatoria del PERTE, correspondiente al año 2023, destinaba 510 millones de euros de presupuesto para ayudas (en forma de subvención 310 millones y en forma de préstamos de 200 millones), con la posibilidad de incrementarse en 200 millones adicionales, llegó a finales de 2022, con mayor presupuesto de los 400 millones inicialmente esperados y con algunos requisitos más flexibles. Forma parte del proyecto estratégico publicado en febrero de 2022, dotado con una línea de ayudas de 1.112 millones de euros.

A marzo de 2023, el total de ayudas públicas solicitadas ascendían a 394,4 millones de euros. Los 22 proyectos tractores implican la realización de 454 proyectos primarios que involucran a 356 entidades participantes. Del total de proyectos primarios, 156 pertenecen a la línea de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética y 298 proyectos a la línea de I+D+i.

La primera convocatoria se adjudicó solo el 36% de los 510 millones de euros previstos y con la segunda convocatoria se intentaba complementar las cantidades que no se ejecutaron en la primera y llegar así a un mayor número de empresas con los temas principales como son la digitalización y sostenibilidad.

Más de 100 empresas de alimentación, entre las que aparecen PYMES, pero también grupos de mayor tamaño como Zamora Company, Trolli Ibérica o Sanlucar Fruit, se han adherido a *EcoFood 2023*, un ecosistema de innovación presentado a finales de octubre de ese año y que se presenta a la convocatoria del PERTE agroalimentario con la intención de movilizar más de 100 millones de euros. Pretende desarrollar más de 40 proyectos relacionados con la tecnología y la innovación en nueve cadenas de valor estratégicas para el sector alimentario español: *vitivinícola, bebidas, frutas y hortalizas, cárnica, dulces, láctea, panificadoras y pesquera*. Implicará, además, a 12 CCAA.

La resolución provisional de la última convocatoria industrial del PERTE AGRO, publicada en septiembre de 2023, demostró que, si bien salió adelante con 13 proyectos tractores aprobados de los 22 presentados, existe todavía un amplio margen de mejora de las condiciones y requisitos de las ayudas para conseguir un éxito completo en la adjudicación de fondos públicos europeos.

Propuestas de actuación sindical

Empiezan a aparecer tensiones en el modelo agrario europeo, tanto por razones regulatorias como de mercado, y de la necesidad, por tanto, de abrir un proceso de reflexión y concertación con los agentes más representativos del sector. La solución o soluciones, aunque no son sencillas, sí necesitan del diálogo en los distintos países europeos y promover la búsqueda de acuerdos comunitarios o nacionales según los casos.

El riesgo al populismo agrario crece en el seno del espacio político europeo con expresiones diferentes que van desde la creación de partidos agrarios que ganan elecciones provinciales (Movimiento Campesino-Ciudadano -BBB- de los Países Bajos o movimientos vinculados a la extrema derecha que se separan de las organizaciones representativas para intentar capitalizar el descontento con propuestas nihilistas que conducen al nacionalismo agrario más primario, como es el caso de Le Pen en Francia o de Vox en España). Su expansión puede tener graves consecuencias para la convivencia entre distintos sectores económicos y sociales de nuestro país[4].

Sería necesario que la PAC garantizara el efecto redistributivo de sus ayudas. Hasta ahora, un 20% de los propietarios acaparan hasta el 80% de los pagos directos, según reconoce la Comisión Europea. Y la reforma recién estrenada (en vigor desde 2023) solo exige que al menos el 10% de las ayudas se destinen a las pequeñas y medianas explotaciones y reserva un ínfimo 3% para los agricultores jóvenes.

Respecto al *Debate Estratégico*, abierto por la Comisión en enero de 2024, lo ideal es que se hubiese hecho coincidir antes de la aprobación de la PAC 2023-2027 o antes de aprobarse las estrategias del Pacto Verde Europeo, que afectan

[4] Fernando Moraleda. Es licenciado en Ciencias Químicas, especializado en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. La Hora Digital del 1 de febrero de 2024.

más directamente al sector agrario y al medio rural europeo. Pero se ha quiso esperar a las elecciones europeas con la voluntad de incidir en la opinión de los agricultores, lo que fue acelerado por los movimientos de protesta agrarios.

En España la agricultura, aunque haya recortado su margen de beneficio en el último año, mantiene una importante diferencia con Europa. Esta se explica por las malas condiciones de trabajo y precariedad laboral que tradicionalmente rigen en este sector. Un botón de prueba de esto es que todos los años 14.500 españoles y españolas participan en la vendimia francesa pero no en la recogida de la fresa en los invernaderos en Andalucía.

El proceso de ajuste del empleo en el país ha devenido en un peor servicio en particular para las personas mayores y la España que se vacía, en paralelo a un aumento de los beneficios de las entidades de crédito que trabajan con el sector y que han registrado cifras récord en el último año. El margen de beneficios por servicio financiero prestado ha subido un 25,7% en el último año, mientras que en la eurozona se ha recortado un 0,6%.

CCOO ha venido insistiendo durante años en la necesidad de atajar el fraude que se registra en la contratación de carácter temporal para actividades cíclicas en la misma época del año, puesto que la relación laboral debe establecerse mediante un contrato fijo discontinuo en sector del campo. También recuerda que urge establecer planes de igualdad y políticas sectoriales que eliminen la discriminación de género.

La realidad laboral del campo es que los salarios están entre los más bajos de la economía española y la temporalidad se mantiene en registros altos. También está entre los sectores que más recurre a las Empresas de Trabajo Temporal y que tiene jornadas más largas, notificando el peor dato de siniestralidad. Y estos aspectos no se encuentra entre las reivindicaciones que movilizan al campo.

En la reunión de febrero de 2024 del Observatorio de la Cadena Alimentaria, CCOO de Industria volvía a insistir en que "*si se quieren abordar todos los problemas del campo, no se puede obviar al eslabón más débil, las personas asalariadas del sector*". Para el sindicato la ley de la cadena alimentaria es una buena herramienta para garantizar la sostenibilidad del sector y la justicia social evitando prácticas abusivas y desleales de determinadas empresas comercializadoras y distribuidoras.

Para CCOO de Industria y UGT-FICA la aplicación de la nueva PAC en nuestro país debe ser una oportunidad para el desarrollo de un nuevo marco de relaciones laborales en el sector agrario donde se avance en la negociación del *1er Convenio Estatal del Campo*, el cumplimiento del SMI vigente y garantizar cobertura de la negociación colectiva a todas las personas trabajadoras del campo y cuya negociación lleva paralizada desde 2018.

Para CCOO de Industria, la *onda expansiva* del SMI debiera incidir en la mejora salarial del trabajo en el campo, así como en la negociación de los convenios del campo, tanto locales como estatal. En este sentido, sería determinante aglutinar en un convenio nacional las relaciones laborales agrícolas, que hasta la fecha

están *sectorizadas*. Hasta la entrada en vigor la reforma laboral, los empleos del campo dependían de que el patrono les volviera a contratar para la próxima campaña, sin ningún tipo de seguridad. El empleo de este sector es temporero, por lo que garantizar una estabilidad completa es complicado. Por una campaña se paga el salario mínimo interprofesional (SMI).

La utilización de los fondos de recuperación europeos debe identificar proyectos tractores que puedan servir en la España Vaciada para generar empleos y donde una parte del país se está quedando fuera de algunos de los procesos de modernización, por lo que se precisan políticas públicas que tengan una tendencia a reequilibrar el territorio. Las empresas de menor tamaño están postergando soluciones a largo plazo en I+D, aun siendo estas industrias las que más necesitan integrarlo.

Es necesario que las convocatorias del PERTE agroalimentario permitan dotarse a la PYME de los recursos necesarios para adoptar las inversiones necesarias en innovación. Así como paliar la baja ejecución de la asignación, ya de por sí muy reducida, teniendo en cuenta que estamos ante la primera rama manufacturera del sector industrial. Son datos que ratifican que el PERTE estaba mal planteado.

El nuevo contexto europeo apuesta por la cohesión social y el reequilibrio entre los territorios, donde el mundo rural -en el que industria agroalimentaria juega un importante papel vertebrador- está llamado a ser parte fundamental. Es necesario reducir las diferencias de desarrollo y promover el reequilibrio poblacional, favoreciendo digitalización de los entornos rurales y combatiendo la pérdida de la biodiversidad, entre otras cosas.

Para ello, es más necesario que nunca la formación, en formato de reciclaje permanente, para dar respuesta a las competencias que nos demanda la agricultura del siglo XXI. El 70% de los profesionales aún no dominan las habilidades para llevar a cabo el trabajo actual. Y la agricultura inteligente tiene mucho que ofrecer.

La industria agroalimentaria, primera potencia industrial española, también exige un pacto de Estado para promover una cadena interconectada "*de la granja a la mesa*". Los alimentos que compran los ciudadanos deberían proceden de un trabajo coordinado, una cadena en la que todos reciban su justa retribución y evitar posiciones dominantes. Otro de los puntos es la necesaria amplificación de una colaboración público-privada que realmente maximice las oportunidades.

En definitiva, seguridad, soberanía y sostenibilidad son los objetivos fundamentales del sector para España y, todo ello, requiere financiación y altas inversiones. Y donde la innovación y las mejoras genéticas son los ejes de la financiación para reconvertir el sector agroalimentario. Al mismo tiempo, este sector es un actor importante en la transición energética por ser un gran consumidor de energía.